

Iván Duque, el aprendiz



EDICIÓN 96 JUN-AGO 2019

En su discurso de posesión del 7 de agosto de 2018, el nuevo presidente enfatizó que el suyo sería un gobierno de unidad sin dogmatismos, y prometió correctivos y ajustes a lo que consideró como fallas estructurales en la implementación del acuerdo de paz (Presidencia de la República, 2018). Un año después es claro que no avanzó decididamente en ninguna de estas direcciones, ni tuvo la audacia de construir puentes entre diferentes sectores para unir al país, ni contó con el apoyo político necesario para revertir aquellos puntos del acuerdo de paz que mayor incomodidad generan al ala más radical de su partido. Se quedó a medio camino y no hay signos claros de que esto vaya a cambiar en los próximos meses. Iván Duque aún no encuentra fórmulas viables para superar el dilema que le impone su doble condición de presidente, que debe hacer concesiones para gobernar y miembro subordinado de un partido radicalizado que se lo impide.

Estamos ante una presidencia sin agenda, sin respaldo popular ni gobernabilidad, digna de un aprendiz atado a su mentor; Iván Duque no logra navegar en un escenario político que expresa cambios importantes en cuanto a la redistribución de las preferencias ciudadanas en el espectro ideológico actual, y la emergencia de nuevos temas que van más allá de la fractura guerra o paz. En estos primeros doce meses, el desempeño legislativo del actual presidente fue pobre y el manejo de su gabinete, errático; estas dos señales despiertan dudas acerca de su capacidad de liderazgo para abordar los enormes retos que enfrenta el país.

Sin rumbo claro

Durante su primer año los presidentes envían señales claras sobre el rumbo y orientación que su gobierno va a tomar en adelante, muestran su marca. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, su discurso se enfocó en la mano dura, en la lucha directa contra el terrorismo y en una estrategia microgerencial y personalista, como fueron sus famosos consejos comunitarios. Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos sacó adelante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con la que reconoció el conflicto armado, se distanció de su antecesor y fijó las coordenadas básicas de un gobierno que hizo de la paz su bandera.

“ Su falta de experiencia en la política práctica, en medio de una vertiginosa carrera hacia la presidencia, debió compensarse con una socialización exprés del libreto uribista, el cual comienza a reportar rendimientos decrecientes, lo que lo obliga a reinventarse pero sin tener el capital político ni las destrezas suficientes para adaptarse al ‘nuevo juego’ que hace unos años se ha prefigurado en el país”.

Al margen de cabecitas, serenatas y charlas de emprendimiento naranja, ha sido poco lo que el presidente Iván Duque le ha ofrecido a la opinión pública colombiana en este sentido; simplemente no se define, no tiene sello ni agenda propia. Lo peor de este panorama, es que el presidente oscila constantemente entre el estilo pendenciero y, algunas veces, abiertamente anti-institucional, propio del uribismo, y un discurso gaseoso pro-unificación que más que reconocer las diferencias, las elimina.

Esta oscilación es apenas comprensible, pues su falta de experiencia en la política práctica, en medio de una vertiginosa carrera hacia la presidencia, debió compensarse con una socialización exprés del libreto uribista, el cual comienza a reportar rendimientos decrecientes, lo que lo obliga a reinventarse pero sin tener el capital político ni las destrezas suficientes para adaptarse al ‘nuevo juego’ que hace unos años se ha prefigurado en el país. Con respecto a este ‘nuevo juego’ se pueden destacarse dos cambios importantes: la redistribución de las preferencias ciudadanas en el espectro ideológico y la emergencia de otros temas en el debate público que rompieron con el monopolio que los asuntos de seguridad tuvieron durante una buena parte de los gobiernos anteriores.

Con el primer cambio, la derecha se fragmentó entre extremistas y moderados; el centro siguió siendo predominante y vigorosamente disputado y la izquierda adquirió un mayor protagonismo y visibilidad. Según los datos del Observatorio de la Democracia de la Universidad de Los Andes, en el 2016 se incrementó el porcentaje de ciudadanos que se auto-identificaron de izquierda (del 10 % en 2004 pasó al 21 % en 2016); el centro mantuvo la tendencia de aglomerar un poco más del 50 % y la derecha reportó una relativa disminución, con lo cual alcanzó la cifra de 23 %, un poco lejos del 39 % que tenía en 2004.

Tabla 1.

Auto-identificación ideológica

Chart by [Visualizer](#)

Fuente: *Observatorio de la Democracia*.

En cuanto al segundo cambio, la seguridad dejó de ser el principal problema para los colombianos y otros temas como la lucha contra la corrupción y los problemas socioeconómicos han cobrado mayor relevancia. La más reciente encuesta de Gallup, realizada en mayo de este año, ilustra claramente esta tendencia: mientras en junio de 2015 la seguridad ocupaba la atención del 45 % de los encuestados, a mayo de 2019 este porcentaje se redujo al 18 % y fue superado por temas asociados a economía/poder adquisitivo con un 20 % y por asuntos relativos a la lucha contra la corrupción con un 23 %. Tales porcentajes indican que la ciudadanía tiene una mayor diversidad de preocupaciones, de modo que los discursos de mano dura no son tan rentables en la actual coyuntura y las banderas de economía social y anticorrupción se encuentran en orillas ideológicas y partidistas que no son afines al gobierno y, por lo tanto, Iván Duque no tiene los incentivos suficientes para sacarlas adelante.

Tabla 2.

¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos?

Chart by [Visualizer](#)

Fuente: *Invamer Gallup*

A pesar de enfrentarse a una realidad política distinta de aquella que le brindó tantos réditos al uribismo puro y duro, Iván Duque eligió ser un gobierno minoritario en beneficio de su partido, lo cual le representa una gratificación inmediata –la simpatía del caudillo y de sus pares–, pero que compromete la viabilidad de su gobierno en el mediano plazo.

Poco que mostrar en materia legislativa

Un indicador de lo anterior fue la incapacidad de Duque de sacar adelante una buena parte de las iniciativas legislativas que radicó en el Congreso en septiembre de 2018, con las que pretendía cumplir con lo prometido durante su campaña (Presidencia de la República, 2018). De acuerdo al análisis de Julián Huertas y Adelaida Ávila en *La Silla Vacía*, de las 18 iniciativas que el presidente presentó, siete fueron aprobadas, seis continúan en trámite y cinco se hundieron (*La Silla Vacía*, 2019). Solo una de sus propuestas clave salió adelante sin mayores contratiempos, la Ley de las TIC; su Plan Nacional de Desarrollo se aprobó ‘raspando’ y a ‘pupitrazo limpio’, y otras como la reforma política, la reforma a la justicia y el paquete anticorrupción, no prosperaron.

Si bien la decisión de no construir coaliciones legislativas a punta de mermelada y la activación del estatuto de la oposición –que finalmente lo dejó sin mayorías claras en el Congreso– incidieron en este bajo desempeño, también hubo otros factores en juego; entre ellos:

La incapacidad del presidente y de su equipo de construir una estrategia distinta pero exitosa para

cautivar a algunos independientes e, incluso, opositores en aquellos temas en los que existe una convergencia programática (v.g. la lucha contra la corrupción).

El desgaste institucional y la parálisis que provocó su respaldo a las objeciones de la Justicia Especial para la Paz, como un claro guiño a los intereses de su partido, a pesar que era de conocimiento público que se trataba de una decisión inviable e, incluso, inconstitucional.

Su insistencia en el recurso retórico de no dar ‘mermelada’ para blindarse de la posibilidad de asignar la representación política que demandan aquellos partidos que garantizaron su elección en segunda vuelta, principalmente el Liberal y Cambio Radical; una representación que, hasta el momento, ha reservado para el círculo más cercano de aquellas fuerzas partidistas que lo respaldaron desde la primera vuelta: el Centro Democrático y, en menor medida, el Partido Conservador.

Un gabinete con más sombras que luces

Uno de los signos que más positivamente valoraron los medios, fue el nombramiento de un gabinete paritario y mayoritariamente no partidista, como demostraron en su análisis, en la revista digital Razón Pública, Fabián Acuña y Jorge Camargo (Razón Pública, 2019).

No obstante, el discreto encanto de la ‘independencia’ duró poco. Aunque en su mayoría es un equipo que transmite renovación y diversidad, la elección de las carteras más importantes, como defensa y hacienda, tuvieron que pasar por el visto bueno de Álvaro Uribe y quedaron en manos de personas de su entera confianza, como señaló el analista político Héctor Riveros (Héctor Riveros, 2018). De esta forma es que fueron elegidos Alberto Carrasquilla, quien ya había ocupado el Ministerio de Hacienda durante la primera administración de Álvaro Uribe; y Guillermo Botero, expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes y uribista de corazón.

Estos dos personajes le han representado un enorme desgaste al gobierno en este primer año, por cuenta de las mociones de censura que los partidos de la oposición convocaron en su contra; los costos que ante la opinión pública ha debido asumir el presidente por las denuncias de corrupción en contra de Carrasquilla y la falta de idoneidad, las constantes salidas en falso y los pronunciamientos estigmatizantes de Botero.

Sin embargo, los relevos en el gabinete que se han registrado hasta el momento, han sido por la presión de varios miembros del Centro Democrático, entre ellos el mismo Álvaro Uribe; por ejemplo, a finales del mes de abril de este año, salió Jorge Mario Eastman de la Secretaría General de la Presidencia de la República luego de que el uribismo lo señalara de restringir la distribución de los cargos burocráticos (El Colombiano, 2019) y en mayo, Gloria María Borrero, que lideraba la cartera de justicia, renunció ante una inminente moción de censura que estaba en marcha en el Congreso, pero también por las fuertes críticas que personas como José Obdulio Gaviria habían expresado en su contra (El Tiempo, 2019).

Sin duda, un manejo errático del gabinete que castiga a quienes mayor incomodidad les genera al

Centro Democrático y premia a aquellos cuyas acciones le representan mayores costos reputacionales a la figura del presidente; en otras palabras, el partido de gobierno gana con lo que Duque como individuo pierde.

¿Qué viene?

Con el inicio de una nueva legislatura el pasado 20 de julio, que coincide con elecciones locales y la selección de presidentes en Senado (Lidio García del Partido Liberal) y Cámara (Carlos Cuenca de Cambio Radical) —quienes están adscritos a los partidos independientes y tienen una orientación pro paz—, el presidente Iván Duque va a tener un margen de maniobra muchísimo menor que el que tuvo en este primer año. Qué tanto se le va a reducir, va a depender de su habilidad de poder cautivar, precisamente, a sectores con capacidad de decisión colectiva al interior de los partidos Cambio Radical y Liberal, los cuales demandan una representación política que uribistas y conservadores ven con malos ojos.

De no avanzar en este sentido, Duque continuará insistiendo en un discurso que invita a pactar sin saber qué, ni cómo; al tiempo que el Centro Democrático le traza líneas rojas y le marca el ritmo de su agenda. Mientras tanto, persistirá en el gran extravío de su gestión: negarse a reconocer que la principal fuente de inestabilidad de su gobierno proviene de su mismo partido y no de aquellos que toma por adversarios o aliados por conveniencia.

Mostrar referencias
